

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

Medellín, veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez, quien actúa como ponente, Francisco Arango Torres y Hugo Alexander Bedoya Díaz, este último por recomposición de la sala ante impedimento aceptado del magistrado John Jairo Acosta Pérez, procede dentro del proceso ordinario con radicado número 05001-31-05-016-2014-00294-02, promovido por el señor **HÉCTOR DE JESÚS RESTREPO HINESTROZA**, contra **POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.**, donde fue vinculada la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES** en adelante **UGPP**, a resolver el recurso de apelación presentado por el apoderado de la parte demandante, contra la sentencia condenatoria emitida el 19 de enero de 2017 por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de

la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...”, se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **004 de 2023**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

Mediante acción judicial, el demandante pretende se declare que le asiste derecho a que se le reactive, reconozca y pague la pensión de invalidez de origen profesional, y en consecuencia, se condene a la demandada a su pago con las mesadas adicionales, intereses moratorios y/o indexación, costas y agencias en derecho.

Para fundamentar sus pretensiones expuso que mediante resolución No. 056697 de 1990 fue pensionado por el ISS por el riesgo de invalidez de origen profesional, a partir del 24 de mayo de 1990, en cuantía de \$41.025. El 9 de octubre de 2009 solicitó al ISS pensión de vejez al cumplir 60 años de edad, la cual le fue reconocida mediante resolución No. 22372 del 30 de noviembre de 2010, dejándosela en reserva hasta que presente renuncia expresa a la pensión de invalidez de origen profesional y certificado de ARP Positiva donde conste el retiro de nómina.

Mediante resolución No. 007967 del 11 de abril de 2011 del ISS, se levanta la reserva de la pensión de vejez y se le reconoce a partir del 3 de octubre de 2009, con 1.441 semanas, IBL de \$1.074.658, porcentaje del 90% y una mesada pensional de \$919.093. La pensión de invalidez le fue suspendida en febrero de 2011.

Admitida la demanda y notificada la demandada dio repuesta alegando la incompatibilidad de la pensión de vejez y la de invalidez. Se opone a las pretensiones y propone las excepciones de inexistencia de la obligación, falta de causa jurídica, enriquecimiento sin causa, prescripción.

En audiencia del 24 de mayo de 2016 se tomó como medida de saneamiento integrar a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscalidad UGPP como parte demandada, pues conforme al artículo 80 de la Ley 1753 de 2015 y el Decreto 1437 de 2015, a partir de junio de 2015 las pensiones que estaban en cabeza de Positiva se trasladan a cargo de la entidad antes mencionada.

Notificada la demanda a dicha entidad, dio respuesta alegando la incompatibilidad de las pensiones de vejez e invalidez. Se opone a las pretensiones y propone las excepciones de mérito de inexistencia de la obligación y prescripción.

En **sentencia del 19 de enero de 2017**, el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, condenó a la UGPP a reconocer y pagar al demandante la pensión de invalidez de origen profesional, con un retroactivo pensional de \$50.648.987, el cual ordenó indexar al momento del pago. Ordenó continuar pagando una mesada pensional del salario mínimo legal a partir de febrero de 2017 con las mesadas adicionales de junio y diciembre. Negó las pretensiones frente a Positiva Compañía de Seguros S.A. y absolvió a la UGP de las demás pretensiones. Se abstuvo de condenar en costas.

RECURSO DE APELACIÓN

Fue presentado por la parte demandante indicando en síntesis que, la indexación debe ir, no solamente por el retroactivo objeto de condena, sino sobre las mesadas que se causen hasta el momento efectivo del pago, porque la actualización de los dineros es un hecho notorio y es un acto de justicia y de equidad. Solicita modificar la sentencia frente a la indexación, la cual debe reconocerse hasta el momento en que la UGPP le pague al actor el retroactivo pensional y las mesadas que se causaron a partir del año 2017 hasta el momento del pago efectivo de toda la obligación.

Así mismo, solicita se revoque la sentencia en lo atinente a que no se condenó al reconocimiento de agencias y costas procesales, pues se deben conceder por cuanto las pretensiones de la demanda prosperaron en su integridad.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

i) La parte demandante en sus alegaciones insistió en lo argumentado en su alzada.

ii) La UGPP solicita en sus alegaciones que no se le condene en costas, al no existir evidencia de la reclamación realizada ante la entidad por el demandante, y porque al no tener conocimiento de la reclamación, ni del expediente administrativo no pudo estudiar la posibilidad de reactivar o no la pensión. Además, porque solo en el año 2010 se decretó la compatibilidad de las dos pensiones vía jurisprudencial.

iii) No se tendrán en cuenta los alegatos presentados por el Dr. Emerson Isaac Mercado Villalba, quien refiere contar con poder para representar a Positiva Compañía de Seguros S.A. de conformidad al poder otorgado a la sociedad JURÍDICA ABOGADOS Y CONSULTORES S.A.S, pues a dicha sociedad no se le reconoció personería en auto del 2 de julio de 2020, al no aportarse la documentación que acreditara la condición de apoderada de general de Positiva Compañía de Seguros S.A.¹

PROBLEMA JURÍDICO

Consiste en determinar en primer lugar, la compatibilidad o no entre la pensión de vejez y la pensión de invalidez de origen profesional. En caso de estimarse el problema jurídico principal, se estudiará la procedencia de la indexación en los términos solicitado por el recurrente, así como la procedencia o no de las costas procesales y agencias en derecho.

¹ Ver archivo 41 del expediente digital

CONSIDERACIONES

Frente al recurso promovido, la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, de conformidad los Arts. 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

Se surte igualmente el grado jurisdiccional de CONSULTA en favor de la UGPP, conforme al artículo 69 del CPT y de la SS, modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007, el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 y el Decreto 169 de 2008, al estar adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio independiente, no administrar recursos propios y depender para su funcionamiento del presupuesto general dela Nación. También, en acatamiento a la sentencia T-513 del 20 de septiembre de 2016, donde se ordenó remitir en consulta las sentencias adversas a dicha entidad.

i) Compatibilidad de la pensión de vejez y la pensión de invalidez de origen profesional

Si bien el artículo 13 literal j. de la Ley 100 de 1993 dispone la incompatibilidad de las pensiones de vejez e invalidez, la hermenéutica de éste mandato fue definida en la línea jurisprudencial de la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, donde funge como sentencia hito la de radicación N° 33558 del 1 de diciembre de 2009, dando viabilidad a la compatibilidad de estas dos prestaciones económicas, cuando la de invalidez es de origen profesional².

Las sub reglas definidas en tal línea jurisprudencial, prohíjan la compatibilidad de las referidas prestaciones, por cubrir contingencias diversas, con fuentes de financiación autónomas, y cotización separada para cada riesgo.

En la sentencia SL3869 de 2021, se expuso con claridad, nuevamente:

² Posición reiterada en las sentencias 33.265 de 2010, 34.820 del 22 de febrero de 2011, 34.820 del 13 de febrero de 2013, 40.560 SL 10311 de 2014, SL2096-2015 radicación N° 57243 del 11 de agosto 2015, SL18072-2016 del 23 de noviembre de 2016, SL17477-2017 del 25 de octubre de 2017, SL1764-2018 del 16 de mayo de 2018, SL1244-2019 del 27 de marzo de 2019, SL3342-2020 del 26 de agosto de 2020 y SL3869-2021 del 25 de agosto de 2021, entre otras.

“ En el caso de las pensiones de invalidez de origen laboral y de vejez es claro que tienen fuentes de financiación independientes, también es diáfano que protegen contingencias bien distintas.

En efecto, la pensión de invalidez de origen laboral cubre el riesgo derivado del trabajo, cuando una persona en razón de las condiciones o el ambiente en el que labora o por circunstancias relacionadas con este, sufre una enfermedad o enfrenta un accidente de trabajo que afecta su desempeño en determinado oficio. Por tanto, es una cobertura propia del trabajo, para cuyo aseguramiento los empleadores, mediante la afiliación y el pago de una prima o cotización, trasladan el riesgo al sistema, a fin de que este otorgue las prestaciones asistenciales y económicas previstas en la legislación.

La pensión de vejez es el reconocimiento que el sistema previsional hace a una persona que prestó su fuerza laboral durante muchos años y que tiene como finalidad garantizar la seguridad económica del trabajador, sustituyendo sus ingresos laborales por una prestación a cargo del sistema. La Corte Constitucional la ha definido como «un salario diferido del trabajador, fruto de su ahorro forzoso durante toda una vida de trabajo, por lo que el pago de una pensión no es una dádiva súbita de la Nación, sino el simple reintegro que del ahorro constante durante largos años es debido al trabajador» (C-546-1992).

Como se puede observar, se trata de contingencias muy diferentes. Ahora bien, para establecer si determinadas prestaciones protegen o no riesgos distintos, es inapropiado acudir a patrones abstractos y etéreos como el hecho de ser titular de un beneficio o asistencia del sistema de seguridad social o estar amparado previamente frente a una situación de precariedad o inseguridad económica. Si así fuera, serían incompatibles las pensiones de sobrevivientes y la de vejez que logren construir con su trabajo las parejas de los afiliados o pensionados fallecidos.

Así mismo, estas aproximaciones tan genéricas desatienden que el sistema de seguridad social está estructurado por segmentos que brindan coberturas a diferentes necesidades y ciclos en la vida del ser humano (p.e. en el trabajo o como persona en inactividad laboral, en el bienestar, la salud, la familia), y pasan por alto que las pensiones son un derecho social construido con el esfuerzo y el trabajo de las personas para protegerse a sí mismas y a sus familias, de manera que no pueden concebirse como dádivas, asistencias o auxilios del Estado.

Tampoco es plausible acudir a criterios como la pérdida o disminución de la capacidad laboral, para afirmar que tanto la vejez como la invalidez implican un deterioro de las capacidades productivas y, por tanto, las pensiones otorgadas recaen sobre el mismo riesgo. Tal abordaje cae en el prejuicio según el cual los afiliados en edad pensional perdieron su capacidad laboral o son inválidos, lo cual reproduce prácticas discriminatorias hacia las personas mayores y banaliza los importantes aportes que hacen al mundo laboral y al crecimiento económico con base en su experiencia, madurez y conocimiento acumulado por largos años de vida.

Por tanto, es desafortunado el argumento de la entidad de seguridad social recurrente, cuando afirma que tanto la pensión de vejez como la de invalidez cubren el mismo riesgo: la imposibilidad de trabajar”.

Los argumentos para negar el reconocimiento de la reactivación de la pensión de invalidez de origen profesional, consistentes en la incompatibilidad de pensiones de invalidez y vejez, son contrarios a las sub reglas jurisprudenciales de la H. CSJ que rigen esta situación particular y concreta, toda vez que desde la sentencia antes referida, se permitió la **compatibilidad de las pensiones de vejez e invalidez de origen profesional**, momento para el cual, mutó el alcance hermenéutico del artículo 13 literal j. de la Ley 100 de 1993 en atención a las reglas de interpretación definidas por dicha corporación.

Nótese como para el **13 de febrero de 2012**, fecha de la reclamación de reactivación de la pensión de invalidez ante Positiva Compañía de Seguros S.A., ya estaba consolidada la línea jurisprudencial de la H. CSJ sobre la compatibilidad de las pensiones de invalidez de origen profesional y vejez, definida en las sentencias citadas, constituyendo precedente.

Tal posición se acata en su integridad por ésta Sala de decisión, por cuanto es el último precedente en la materia que constituye doctrina probable, según el mandato de la sentencia C-836 de 2001.

En consecuencia, le asiste derecho al demandante a la reactivación de su pensión de invalidez de origen profesional, el cual se configura por el análisis de la línea jurisprudencial aplicable. Debiéndose confirmar la sentencia en este punto.

El *a quo* liquidó el retroactivo de la pensión de invalidez de origen profesional en cuantía de un SMLMV a partir del 1 de marzo de 2011, lo cual se encuentra ajustado a derecho dado que el retiro de nómina de se produjo para febrero de 2011, sin que se configurara la excepción de prescripción conforme a los artículos 151 del CPT y de la SS y 488 del CST, al haberse presentado la reclamación el 13 de febrero de 2012 y demandado el 5 de marzo de 2014. Por lo cual también se confirmará la sentencia en este aspecto.

ii) Indexación

El *a quo* solo ordenó indexar la suma de \$50.648.987 correspondiente al retroactivo pensional liquidado del **1 de marzo de 2011 al 31 de enero de 2017**, sin embargo, se modificará esta decisión atendiendo a la notoria pérdida de poder adquisitivo de la moneda en Colombia, lo cual lleva a indexar también el valor adeudado por mesadas causadas a partir de febrero de 2017, para que se satisfaga al acreedor sus derechos en los mismos términos que cuando debió pagarse la deuda. Tal actualización debe materializarse, en este caso, al momento de hacerse efectivo el pago de las obligaciones reconocidas en la sentencia.

iii) Procedencia de la condena en costas y agencias en derecho en primera instancia a cargo de la UGPP.

El *a quo* se abstuvo de condenar en costas y agencias en derecho a la UGPP, al haberse negado la pretensión de intereses moratorios. Por su parte, la UGPP solicita no se imponga dicha condena al no haber podido estudiar la posibilidad de reactivar o no la pensión y porque solo en el año 2010 se decretó la compatibilidad de las dos pensiones vía jurisprudencial.

De cara a este punto ha de indicarse que, conforme al artículo 365 del CGP, las costas constituyen la condena accesoria que impone el juez a la parte vencida en un proceso.

Es de resaltar que el objeto del proceso es la pretensión que se hace valer en la demanda, por tanto lo dispuesto en la sentencia ha de corresponderse con aquella, cualquiera fuere su naturaleza, y acogerla o rechazarla, según resulte fundada o infundada la pretensión, la ley procesal ordena al Juez condenar al pago de las costas a la parte vencida, creando así la naturaleza accesoria de la condena en costas, por la relación de medio a fin en que las costas se encuentran con la pretensión reconocida o negada en la sentencia.

La parte vencida en este juicio fue la UGPP con independencia que lo haya sido total o parcialmente, de hecho, si bien no prosperó la pretensión de intereses moratorios se concedió la pretensión subsidiaria que lo fue la indexación, por lo que resulta procedente la condena en costas y agencias en derecho en primera instancia, debiéndose **revocar** la sentencia en este punto.

Si bien el artículo 365 del Código General del Proceso faculta al juez para abstenerse de condenar en costas cuando prosperen parcialmente las pretensiones de la demanda, para la Sala como lo anotó el impugnante al salir avante la pretensión subsidiaria que refiere a *indexación* salieron avante las súplicas de la acción.

Ante la prosperidad del recurso de apelación no se impondrán costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR la decisión que se revisa en virtud del recurso de apelación presentado por la parte demandante, en el sentido de **ORDENAR** a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES la indexación, no solo del retroactivo liquidado en primera instancia, sino también del valor adeudado por mesadas pensionales causadas a partir de febrero de 2017, hasta el momento efectivo del pago de las obligaciones reconocidas en la sentencia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: REVOCAR la decisión frente a las costas procesales de primera instancia, y condenar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES a dicho concepto, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la decisión, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

CUARTO: Sin costas en esta instancia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

QUINTO: Lo resuelto se notifica por **EDICTO**.

Se ordena regresar el expediente al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

Francisco Arango Torres

Hugo Alexander bedoya Díaz

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Hugo Alexander Bedoya Diaz
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 001 Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **2f146c5783643fec95685fd7f6c178eac671b17c8819e720a1c540174a32df57**

Documento generado en 26/01/2023 01:59:19 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>